

Territorios indios y negros, sustento de los megaproyectos en América Latina. Orientación a la praxis

Nemesio J. Rodríguez



El milenio se abrió, en el subcontinente, con la modalidad explícita del rediseño de la ocupación espacial y, por lo tanto, de reterritorialización del capital y la población. Las obras de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, exploración y explotación gasera y petrolera, etc.) tuvieron el sentido básico de “integración nacional” de territorios “aislados”, el acceso intermitente de ciertos recursos naturales al capital y la selección de puntos privilegiados para el comercio internacional y el turismo en las últimas cinco décadas del siglo pasado. El contexto de la globalización facilita y permite un cambio de escala en la planificación pasando de regiones subnacionales articuladas a iniciativas subcontinentales que aprovechan la infraestructura preexistente, la redimensionan en términos jurídicos y administrativos “nacionales”, la modernizan (cluster tecnológicos, aduanas virtuales, etc.) y amplían. Es así como emergen la Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica (IIRSA) en el 2000 y el Plan Puebla Panamá (PPP) en el 2001.

Ambos megaproyectos (IIRSA y PPP) se presentan, en reuniones oficiales, como acuerdos aduanales y de flexibilización jurídica para el libre comercio entre corredores de desarrollo, aprovechando y construyendo infraestructura que los haga posibles, en ejes multimodales que cohesionen regiones y faciliten el transporte de mercancías y productos entre el Atlántico y el Pacífico, y estos cortados y unidos, a su vez, por circuitos transversales. Para lo anterior, el primer paso es el de la integración física en áreas de transporte, telecomunicaciones y mercados energéticos y “desarrollo” de espacios

aislados. Es decir que la presencia intermitente del gran capital pasa a permanente y el acceso difícil a los recursos naturales renovables y no renovables pasa a factible.

El PPP involucra a 9 estados del Sur Sureste de México (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y los países del Istmo Centroamericano (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); región que tiene 64 millones de habitantes. La parte básica implica un Corredor Atlántico y otro Pacífico con Corredores Complementarios de Interconexión, una red ferroviaria, integración portuaria, rutas de navegación, sistema carretero y red aeroportuaria que se acompañan de iniciativas en telecomunicaciones, integración energética, líneas de transmisión, hidroeléctricas y geotermia, gaseoductos, turismo y arqueología, e integrando al Corredor Biológico Mesoamericano, al Proyecto Mundo Maya y al Proyecto de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. De norte a sur implican 4000 km de carreteras; 2400 km en el Corredor Pacífico y 1600 km en el Corredor Atlántico. Para la conexión Atlántico–Pacífico remodela y construye 10 puertos; moderniza el Canal de Panamá; construye la hidrovía–canal en el Lago de Managua–ferrocarril–carretera desde la frontera atlántica norte de Costa Rica a la frontera de Nicaragua con Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca; construye la comunicación carretera y ferroviaria entre Puerto Cortés y Puerto Cutuco, incidiendo en territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador; y actualiza y construye el sistema del Istmo de Tehuantepec entre el Puerto de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. El papel fundamental de estas conexiones interoceánicas están determinadas por el papel que juegan y jugarán en los próximos 15 y 20 años las economías de China e India. En tanto composición geopolítica hay que recordar que Colombia se integró al PPP a fines de 2004 y que firmó un acuerdo de cooperación energética con Venezuela para proporcionar gas y construir un gaseoducto hasta Nicaragua en donde se unirá con el gaseoducto que partirá de Ciudad PEMEX en Tabasco (México).

IIRSA, por su lado, involucra a todos los países Sudamericanos en 9 ejes: Amazonas, Andino, Capricornio, del Sur, Escudo Guayanés, Mercosur–Chile, Interoceánico Central, Perú–Brasil–Bolivia, e Hidrovía Paraguay–Paraná.



Eje Amazonas, con 52 millones de habitantes, ocupa las zonas amazónicas de Brasil, Colombia y Perú y la totalidad de Ecuador. Ahí están 1/3 de la biodiversidad, 1/5 del agua dulce y 2/5 de las selvas del planeta. Se plantean 13 puertos, 5 aeropuertos, 11 carreteras y puentes, red de electrificación y 8 vías de navegación.

Eje Andino, con 113 millones de habitantes, se extiende de Bolivia a Venezuela pasando por Perú, Ecuador y Colombia. Se la visualiza como zona de reservas energéticas (petróleo, gas y carbón) y con potencial hidroeléctrico. Se plantean 30 carreteras y puentes, 1 puerto, 9 aeropuertos, sistemas de conectividad, comunicaciones y telecentros, y líneas de integración energética.

Eje Capricornio, con 25 millones de habitantes, ocupa las zonas norte de Chile y Argentina, Río Grande do Sul de Brasil y Paraguay. Se plantean 15 carreteras y puentes, 5 puertos, 9 ferrocarriles, 1 aeropuerto y 1 sistema de interconexión eléctrica.

Eje del Sur, con 21 millones de habitantes, ocupa las zonas sur de Chile y Argentina. Se plantean 15 carreteras y puentes, 3 ferrocarriles, 2 puertos y 2 sistemas de interconexión energética.

Eje Escudo Guayanés, con 6 millones de habitantes, ocupa el oriente de Venezuela, el arco norte de Brasil, y Guyana y Surinam. Se visualiza la región como de potencial energético, minería, forestal, pesca y agricultura. Se plantean 19 carreteras y puentes, 3 puertos, 1 ferrocarril, 2 canales de navegación, 4 hidroeléctricas, 2 líneas de interconexión energética, 2 líneas de fibras ópticas, 1 planta de celulosa, 1 procesadora

de soya y 1 procesadora de carne.

Eje MERCOSUR–Chile, con 126 millones de habitantes, ocupa las zonas centro–norte de Chile y Argentina, oriente de Paraguay, sureste de Brasil y Uruguay completo. En este espacio se da el 70% de la actividad económica sudamericana. Se plantean 37 carreteras y puentes, 9 puertos, 4 ferrocarriles, 2 aeropuertos, 4 hidroeléctricas, 1 central termoeléctrica, 3 líneas de transmisión energética y 1 gaseoducto.



Eje Interoceánico Central, con 76 millones de habitantes, ocupa el norte de Chile, sur de Perú, sur de Brasil y Bolivia y Paraguay completos. En esta zona se contabiliza el 26% del PIB de América del Sur. Se plantean 33 carreteras y puentes, 3 aeropuertos, 6 ferrocarriles, 5 puertos, 2 líneas de fibras ópticas y 1 sistema gasero–termoeléctrico.

Eje Perú–Brasil–Bolivia, con 12 millones de habitantes, ocupa el sur de Perú, la región amazónica de Bolivia y el noroeste de Brasil. Se plantean 9 carreteras y puentes, 1 aeropuerto, 3 hidrovías, 3 hidroeléctricas y 2 líneas de transmisión energética.

Eje Hidrovía Paraguay–Paraná, con 140 millones de habitantes, ocupa el Oriente Boliviano, Centro de Paraguay, Mesopotamia y litorales ribereños de Formosa, Chaco, Santa Fé y Buenos Aires de Argentina y el Brasil central. Se plantean 15 puertos, 8 aeropuertos, 1 sistema de navegación Corumbá (Brasil)–Buenos Aires (Argentina), 1 línea de fibra óptica y 1 línea energética.

Ambos planteos (IIRSA y PPP) están en proceso y su temporalidad es indefinida, sus nombres pueden ir cambiando con el tiempo y las circunstancias políticas regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, en cualquier escenario de coyunturas diversas, ya desencadenaron procesos que incidirán, mínimamente, durante los próximos 25 años en las poblaciones de América Latina.

Este proceso de integración silenciosa manifiesta cierta preocupación por el medio ambiente, tema sobre el cual ya participan las tres grandes transnacionales de la conservación mundial (WWF, Conservation International y Nature Conservancy) que comparten sus consejos de administración y consultivos con las transnacionales que ya están instaladas en el subcontinente o que pretenden estarlo en un futuro próximo y que son fuertemente denunciadas por sus impactos negativos al ambiente y las sociedades locales. Los impulsores proponen dar valor a los recursos naturales regionales fomentando su extracción, transformación, transporte y comercio con lo cual, declaran, se “generarán condiciones de desarrollo regional” en zonas de pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, el factor complejo población no aparece, fuera de sus cantidades absolutas y sus referencias al bajo índice de desarrollo humano. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propagandiza las “Oportunidades de Negocios” del subcontinente, en la etapa actual, en: estudios y consultorías, estudios de factibilidad, proyectos de ingeniería, construcción, operación, asociación público-privada y financiamiento. Lo anterior en un portafolio de 189 estudios y 170 proyectos (www.iadb.org/exr/bs/1025/IIRSA_esp.ppt). Todos los proyectos impactan, en mayor o menor medida, a pueblos indios o afroamericanos directa e indirectamente.

Para no perder las dimensiones recordemos que la población total de América Latina y el Caribe era de 166 millones (1950), pasó a 513 millones (2000) y se proyecta a 808 millones (2050) de personas.¹ Se valora que 225 millones de personas son pobres y de éstas unos 98 millones están en condiciones de extrema pobreza, con patologías que un 11 por ciento de las mismas presentan carencias nutricionales.² “Se estima que

¹ Glen Imán, *Población de América Latina y el Caribe*, CIAT-Centro de Agricultura Tropical-Costa Rica, septiembre 5 de 2005, http://gisweb.ciat.cgiar.org/population/index_es.htm

² María Elena Valenzuela y Marta Rangel (eds.), *Desigualdades Entrecruzadas. Pobreza,*

la población indígena de América Latina oscila entre 40 y 60 millones".³ El 90 por ciento se concentra en 5 países: Perú 27%; México 26%; Guatemala 15%; Bolivia 12% y Ecuador 8%. "En Guatemala, México, Bolivia y Perú el porcentaje de población indígena que vive en condiciones de pobreza supera el 60%.⁴ Este conjunto de población indígena lo componen alrededor de 400 pueblos distintos, que se encuentran en casi todos los países de América Latina, sin olvidar que hay grupos de los cuales se sabe su existencia pero que rehuyen al contacto y, por lo tanto, no son contabilizables. A esta raíz pre-colonial – aunque no hay que olvidar la existencia de procesos de etnogénesis, es decir nuevas identidades indias–, hay que agregarle la raíz colonial de 150 millones de afrodescendientes, alrededor del 30 por ciento de la población total regional. El 80 por ciento de estos se concentran en 3 países: Brasil 50%; Colombia 20% y Venezuela 10%.⁵ Es decir, que alrededor del 40 por ciento de la población regional tiene rasgos de distinción por pertenencia étnica o racial, con todas las carencias existentes en su captación censal y, cuando la hay, está el problema de la imposibilidad de homologación de la misma por inexistencia de criterios uniformes; dándose casos, como el de México, donde no hay manera de contar con información estadística referida a la población afromexicana, aunque se la "estima" en 450 mil.⁶

Es decir, que el enrejado de planes y proyectos sobre y para el subcontinente se superponen a un entramado de sociedades y culturas que son ignoradas y, por lo tanto, invisibles en la planeación del "desarrollo" propuesto. Y cualquier movimiento territorial de un

género, etnia y raza en América Latina, OIT, Santiago, 2004, p. 9.

³ Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez, *Los Pueblos Indígenas de México. 100 Preguntas*, UNAM, México, 2004, p. 9.

⁴ Martín Hopenhayn, *La Pobreza en Conceptos, Realidades y Políticas: una perspectiva regional con énfasis en minorías étnicas*, Red del Tercer Mundo, Montevideo, junio 3 de 2003. www.redtercermundo.org.uy

⁵ Martín Hopenhayn, *op. cit.* y M.E. Valenzuela y M. Rangel, *op. cit.* p. 15.

⁶ Ben Vinson III y Bobby Vaughn, *Afroméxico*, CIDE/FCE, México.

megaproyecto transforma más, mucho más, que todos los discursos sobre beneficios o exclusiones alrededor del mismo. Hay que recordar que ambos procesos han tenido detractores, más el PPP que la IIRSA, en discursos basados más en principios ideológicos que en análisis técnicos, económicos, sociológicos y culturales e impulsados por sectores de oposición política regionales y nacionales y por organizaciones civiles y religiosas. Las supuestas "bondades" de ambas propuestas han sido instigadas desde gobiernos estatales, cámaras de comercio e industria; empresas de origen nacional transnacionalizadas; transnacionales en campos de biotecnología (farmacéuticas y de alimentos), turismo, minería, forestal (especialmente celulosa), construcción, energéticas (gas, petróleo, electricidad), seguros, ordenamiento territorial (rural, urbano y marítimo), administración, pesqueras, financiamiento y Banca Multilateral y Comercial. Son las que ven y velan por la profundización del negocio globalización neoliberal en curso. No está de más recordar que muchos de los impactos por los cuales se moviliza la inquietud social de la población del subcontinente (pobreza y pobreza extrema, precariedad laboral y desempleo, salario insuficiente, trabas comerciales, pérdida del acceso a tierras y recursos, bajo nivel educativo, situaciones severas de desnutrición infantil, corrupción como estilo de vida, pérdida de masa forestal y de suelos, contaminación de cursos de agua dulce y ambiental, hacinamiento, desaparición y tráfico de especies, programas supuestamente de apoyo a los más desfavorecidos pero en realidad reproductores de la pobreza y de mano de obra barata, crispación social, ingobernabilidad, democracia formal sin contenido, narcotráfico, trata de blancas y de niños, tráfico de órganos, trasiego de armas, justicia precaria, discriminación y racismo, migración internacional, aumento de la importancia creciente y relativa de las remesas disfrazadas en las cuentas públicas como inversión extranjera directa, privatización y transnacionalización de los recursos sociales y naturales, concentración y transnacionalización del poder, las riquezas y las soberanías, etc.) son parte de la ideología y práctica de la globalización en su versión hegemónizante, misma que promete un

futuro, en tiempo ambiguo, promisorio, paradisíaco.

Aumentan las aristas y complejidades, sociales y espaciales, si también se toma en cuenta: la agonía y decadencia del indigenismo tradicional de Estado en su versión presente; la confusión vigente entre diferencia y diversidad o entre captación de demanda, encuesta de opinión y consulta informada; la suplantación de los hechos por los discursos políticos, ideológicos y jurídico-administrativos repetitivos y fundamentalistas a través del tiempo (mojigatamente, se diría); la carencia de propuestas de desarrollo a escala incluyentes de pluralidad y disidencia; la ignorancia provocada en pueblos indios y afroamericanos, rurales y urbanos, para la toma de decisiones territoriales sobre sus recursos sociales y naturales en la construcción de su futuro y como parte de proyectos sociales mayores; y la emergencia visualizada por las sociedades dominantes en términos de coyuntura y de moda, de lo indígena y lo afroamericano en contextos regionales, nacionales e internacionales.

Este panorama de superposiciones y entrelazamientos nos pone frente a condiciones inéditas para la producción de conocimientos y técnicas cuyo eje sea la articulación de sociedades, culturas, derechos y compromisos (en la participación informada de y con, de todos) y el desarrollo. Es decir, ética, ciencia y técnica involucradas en los procesos sociales en modalidades innovadoras; más acá de las modas intelectuales en boga y más allá de la tecnología de mercado. Es más, multi e interdisciplina conociendo y operando en la interculturalidad concreta y en relaciones multiétnicas y plurinacionales en procesos de transición.

Si, hoy por hoy, el paso de las transiciones sociales lo marca el capital, su reproducción y las contradicciones que despliega su accionar, la praxis cognitiva orienta hacia las transformaciones posibles de los distintos campos de fuerza puestos en juego. El poeta Paul Éluard (Francia 1895–1952) sostenía “Hay otro mundo y está en éste”.